



## **FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA CONTRATACIÓN MINERA EN COLOMBIA Y CHILE**

MARTHA ELENA RONDÓN RAMÍREZ  
Código 3500766

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Especialización en Derecho Administrativo

Bogotá D.C, Colombia

2014

# **FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA CONTRATACION MINERA EN COLOMBIA Y CHILE**

**Martha Elena Rondón Ramírez\***

## **RESÚMEN**

La explotación de los recursos mineros en Colombia y en especial, los contratos de concesión minera, son temas de actualidad en el ámbito económico nacional, en razón a que el gobierno ha definido el sector minero como la “locomotora” que impulsará el desarrollo del país por las altas inversiones extranjeras que, en gran medida, ingresarán por cuenta de la explotación de la riqueza minera que teniendo un manejo adecuado, contribuirán a la disminución de los sectores más pobres de la sociedad y que sólo logrará el avance económico, blindando el proceso de adjudicación de los contratos de concesión, lo cual le corresponde al Estado a fin de ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas y orientar un desarrollo equilibrado y competitivo de la minería, que a nivel mundial, han hecho de este sector una fuente de desarrollo. Tal es el caso de Chile, que incluye en su legislación la facultad para que un juez sea quien adjudique los contratos ya que lo que se está dando en concesión es la riqueza misma del país, y el juez debe propender porque a quien sea adjudicado, cumpla con las mejores condiciones técnicas, económicas y ambientales para la nación.

### **Palabras Clave**

Propuestas de contratos de concesión, adjudicación, inversión extranjera, medio ambiente, avance económico, consulta previa, minerales estratégicos, áreas excluibles de minería.

---

\*Abogada Universidad Autónoma de Colombia, Estudiante de la Especialización en Derecho Administrativo, martha.rondon@anm.gov.co.

# **LEGAL BASIS FOR THE MINING RECRUITMENT IN COLOMBIA AND CHILE**

**Martha Elena Rondon Ramirez\***

## **Abstract**

The exploitation of mineral resources in Colombia and especially mining concession contracts, are the hot topic in the national economic level, the reason that the government has defined the mining sector as the engine that will drive the country's development by high foreign investment, which largely account enter through the exploitation of mineral wealth than with proper management, will contribute to the reduction of the poorest sectors of society and achieve economic progress only, shielding the process procurement of mining concession, which belongs to the State in order to provide legal certainty to investors and direct a balanced and competitive mining that can put it to the level of countries worldwide have fact a source of mining development, as in the case of Chile, that by including in their legislation that the administrative judge who is awarded the concession contracts, because what is happening in concession, is the same in the country wealth and the judge must advocate for whoever is awarded, better meets the technical, economic and environmental benefits for the nation.

## **Key Works**

Proposals for concession contracts, award, foreign investment, environment, economic progress, consultation, strategic minerals, excludable mining areas.

## INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende acercarnos al estudio de la legislación minera colombiana, enunciando en primer lugar el marco jurídico vigente aplicable a los contratos de concesión minera enmarcados en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), en razón a que el sector minero es generador de riqueza y contribuye grandemente al desarrollo del país.

La metodología que se implementará será eminentemente descriptiva, realizando un estudio comparativo de la legislación minera colombiana y la legislación chilena, toda vez que ésta última se vislumbra como de avanzada en el tema minero. Se pretende estudiar el trámite de adjudicación de los contratos de concesión minera en Chile, el cual se inicia ante el Juez, a diferencia del trámite de adjudicación en Colombia que se realiza ante la Autoridad Minera.

Igualmente se determina cuál de los aspectos más significativos estudiados en la legislación minera chilena, se podrían aplicar en el proceso minero colombiano, a fin de fortalecer el mismo dándole confianza al proponente de que su solicitud será estudiada en el marco de los principios de la contratación estatal.

En síntesis, se pretende identificar las falencias en la adjudicación de los contratos de concesión minera en Colombia por una agencia estatal, y la necesidad de implementar aspectos encontrados en los contratos de concesión minera chilena en la legislación minera colombiana, reseñando las diferencias encontradas en la normatividad.

## 1. CONTEXTO ACTUAL DE LA MINERÍA EN COLOMBIA

En el discurso de posesión del presidente Santos<sup>1</sup>, en el que plasmó las directrices para el nuevo gobierno, al indicar que uno de los aspectos en que enfocaría el desarrollo del país sería el sector económico, que mediante un esfuerzo impulsado conjuntamente por el gobierno, sector privado, empresarios y trabajadores se podrían en marcha las cinco locomotoras, que harían despegar nuestra economía, el campo, la infraestructura, la vivienda, la innovación y la minería, a fin de que jalonen los vagones de la industria y el comercio (los mayores generadores de empleo), con el propósito de lograr la paz y prosperidad de la nación.

Es así, como se orienta este estudio en el sector minero, aún desde sus orígenes, toda vez que se avizora como uno de los ejes económicos que determinará el desarrollo del país.

---

<sup>1</sup>. Discurso de posesión del presidente Juan Manuel Santos Calderón, [wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/agosto/2010080715.aspx](http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/agosto/2010080715.aspx), hora de consulta 12.03 pm.

### 1.1 Orígenes

Desde los tiempos de la colonia, la economía colombiana ha sido básicamente minera (Melo, 1995)<sup>2</sup>:

*“Dentro del cuadro de la economía colonial hispanoamericana, la Audiencia de la Nueva Granada (actual Colombia), elevada a la categoría de virreinato en 1739, tuvo esencialmente una economía minera, casi exclusivamente de productos de oro, pues la plata representó en su producción un papel secundario. Desde la iniciación de la conquista y a través de los tres siglos de vida colonial, el oro fue su primero y casi único artículo de exportación (...).*

Igualmente (Ponce, 2012)<sup>3</sup>, ilustra sobre los esfuerzos del gobierno colonial en hacer de la minería una fuente de riqueza y relata que a

---

<sup>2</sup>. MELO, Jorge Orlando. Colombia Hoy Perspectivas hacia el siglo XXI. IM Editores, Bogotá 1995, pág. 29.

<sup>3</sup>. PONCE MURIEL Álvaro. ¿Cuál locomotora minera? El desalentador panorama de la minería en Colombia. Debate, Bogotá 2012 Pág. 17,20.

mediados de 1750, el Virrey Antonio Caballero y Góngora ordenó que don Juan José D'elhúyar, científico con estudios de química y metalurgia realizara un diagnóstico de la minería para sacar del atraso al sector y la convirtiera en fuente de trabajo y riqueza, el cual presentó al Virrey en 1789, con el fin de establecer en el Nuevo Reino de Granada “un cuerpo de minería” que se encargaría de administrar los asuntos gubernativos y fiscales de la actividad<sup>4</sup>.

En época de la independencia, en el Congreso de Angostura de 1819, el Libertador Simón Bolívar indicó que uno de sus propósitos era sacar del atraso a la minería, emprendiendo la explotación bajo la figura del arrendamiento de las minas iniciando con las de Marmato y Supía arrendadas por el gobierno a la firma Goldsmhmidt & Co, además del arrendamiento de las minas de oro de Pamplona a la Asociación Colombiana de Minas de Londres, en 1824.

---

<sup>4</sup> BOUSSINGAULT, Jean Batiste y ROULIN François Desire. Viajes Científicos a los Andes Ecuatoriales edición facsimilar de la impresión de Paris, 1849, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Santafé de Bogotá, 1991.

El Libertador tenía claro que la minería era la actividad que le daría el impulso a la incipiente república, por ello expidió un decreto que puede considerarse como el primer código de minas ya que recoge un conjunto coherente de principios básicos de la propiedad, el descubrimiento y la titulación de minas, así como los procedimientos para garantizar los derechos mineros otorgados a los particulares.

Durante el siglo XIX, el país se vio avocado a varias expediciones de buscadores de fortuna, entre ellos expertos franceses, que enfrentaron situaciones de incertidumbre y riesgo, ya que las labores de exploración y explotación pueden ocasionar la pérdida de los recursos invertidos.

A mediados del siglo XX, los gobiernos promovieron el aprovechamiento de los yacimientos de minerales, adecuando programas para conocer el potencial minero del país. Es así como uno de los primeros programas fue el Inventario Minero Nacional con la asistencia tecnológica del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el cual arrojó

resultados sobre el potencial minero del país. Al concluir este proyecto se efectuó la creación de Ingeominas, (alrededor de 1990). El Ministerio de Minas y sus entidades adscritas Minerales de Colombia (Mineralco) y Empresa Colombiana de Carbón (Ecocarbón), pusieron en conocimiento entre los inversionistas los resultados de dichas investigaciones. Muchos de los proyectos de exploración de importantes empresas mineras corresponden a áreas investigadas por esas entidades estatales, pero aun así Colombia se considera un país subexplotado, debido a factores tales como el conflicto interno que impedía que las empresas interesadas, pudieran explorar el país en búsqueda de los yacimientos, así fue como la base de la industria minera constituida por la mina de níquel de Cerro Matoso<sup>5</sup>, así como por las minas de carbón del Cerrejón.

---

<sup>5</sup> La Sala de Consulta y Servicio Civil del Alto Tribunal, con ponencia del magistrado Augusto Hernández Becerra, señaló que no es posible hacer la prórroga de los contratos 866 de 1963 y 1727 de 1971 porque ya existe un acuerdo anterior entre el Ministerio de Minas y la multinacional para continuar con la explotación de níquel una vez los dos primeros contratos expiren el 30 de septiembre del 2012.

## **2. ASPECTOS GENERALES DE LA LEGISLACIÓN MINERA**

En nuestro país, con la vigencia de la Ley 685 de 2001 ó Código de Minas, las empresas interesadas encuentran en la nueva legislación minera, claridad en las reglas de juego, pero lo que impulsó la actividad minera fue el interés de la Empresa Anglo Gold Ashanti, una de las más importantes productoras mundiales de oro, la cual suscribió más de 200 contratos de concesión minera; ello creó la expectativa en muchas empresas internacionales que decidieron incursionar en el campo de exploración y explotación, lo que se conoce en la actualidad como el “boom minero”.

---

Según este concepto del alto tribunal, el Gobierno debe renegociar los términos del contrato que queda vigente siempre y cuando cumpla los estándares de legislación minera y ambiental, proteja en toda su integridad el patrimonio de la Nación y los derechos sociales de todos los implicados en la actividad de la minería.

"Puesto que las cláusulas del contrato 051-96M no sufrieron alteración alguna en su momento, como consecuencia de la expedición de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), ni han sido objeto de expresa modificación mediante acuerdo escrito de las partes, los contratantes continúan vinculados a las obligaciones que adquirieron en el contrato 051-96M y conservan a salvo los correlativos derechos", indica el concepto del Consejo de Estado <http://www.semana.com/nacion/articulo/contrato-cerro-matoso-ira-hasta-2029-minminas/265414-3>

Por ello, el gobierno nacional en desarrollo de su plan gubernamental y por las facultades extraordinarias, otorgadas por el Congreso de la República a finales del 2011, puso en marcha una reestructuración del Estado <sup>6</sup>, a fin de adaptar las diferentes entidades a las nuevas

---

<sup>6</sup>. Decreto 4134 de 2011.

Que de conformidad con el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la autoridad minera o concedente es el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad nacional, que tenga a su cargo la administración de los recursos mineros, la promoción a la industria minera, la administración del recaudo y distribución de las contraprestaciones económicas que señala el Código de Minas.

Que con el fin de buscar mayor eficiencia en la administración del recurso minero se hace necesario crear una entidad especializada que se encargue de los procesos de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, promoción y vigilancia de las obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras.

Que en los literales e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 se confirieron facultades extraordinarias al Presidente de la República para crear entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y señalar sus objetivos y estructura orgánica.

Artículo 1°. Creación y Naturaleza Jurídica de la Agencia Nacional de Minería, ANM. Créase la Agencia Nacional de Minería ANM, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 2°. Domicilio. La Agencia Nacional de Minería, ANM, tendrá como domicilio la ciudad de Bogotá, D. C., y ejercerá sus funciones a nivel nacional.

[www.avancejuridico.com/ctualidad/documentosoficiales/2013/48828/r](http://www.avancejuridico.com/ctualidad/documentosoficiales/2013/48828/r).

realidades sociales y económicas, que se evidencian a nivel nacional e internacional. Es así como se llevó a cabo la creación de la Agencia Nacional de Minería, cuyo objetivo “es fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada, estimular estas actividades en orden de satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento realice en forma armónica con los principios y norma de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país”<sup>7</sup>.

## **2.1 Contrato de Concesión Minera en Colombia**

En Colombia, la explotación de los recursos mineros tiene su base en la Constitución Política, Art. 332, que a la letra reza: *“El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y*

---

<sup>7</sup> Informe Agencia Nacional de Minería Noviembre de 2012.



*perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.”*

Este precepto constitucional encontró su desarrollo en el artículo 5 de la Ley 685 de 2001 que indica: *“los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o en el subsuelo en cualquier estado físico natural son de la propiedad exclusiva del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o Grupos, salvo las situaciones jurídicas individuales subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada”<sup>8</sup>.*

---

<sup>8</sup> **Sentencia C-331/12 Corte Constitucional**

En reciente pronunciamiento la Corte hizo un recuento jurisprudencial en relación con la propiedad y explotación minera en Colombia, reglas jurisprudenciales que se reiteran en esta nueva oportunidad: (i) Los artículos 332, 334, 360 y 80 de la Constitución Política, consagran: (a) la propiedad del Estado del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos de conformidad con las leyes preexistentes; (b) la facultad de intervención del Estado en la explotación de los recursos naturales y uso del suelo, así como la planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; (c) el deber del Estado de conservación de los recursos naturales no renovables, y el derecho sobre los recursos económicos o regalías que se deriven de su explotación, así como la facultad para conceder derechos especiales de uso sobre esos recursos, a través de concesiones; (d) el concepto de Estado como propietario de los recursos naturales no

La legislación minera establece en su artículo 6 que el derecho a explorar y explotar los recursos minerales, sólo se adquiere mediante el otorgamiento de títulos, lo cual únicamente se podrá constituir mediante el Contrato de Concesión Minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.

De igual forma, el artículo 16 del Código de Minas indica que la naturaleza del contrato de concesión minera y los demás títulos emanados del Estado, no transfieren al beneficiario un derecho de propiedad de los minerales “in situ” sino que establece de forma exclusiva y

---

renovables, el cual comprende el conjunto de todas las autoridades públicas, a todos los colombianos y a todas las entidades territoriales; (e) la amplia libertad de configuración del Legislador, que es quien debe determinar, por disposición de la Carta, las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos. (ii) De otra parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades en relación con la figura jurídica de la concesión para el uso y explotación de recursos naturales no renovables, como el agua, los metales preciosos o las salinas, encontrando que el otorgamiento de concesiones para la explotación de recursos naturales, de conformidad con el conjunto de las disposiciones constitucionales y legales que le son aplicables, tiene un claro sustento constitucional. Igualmente, en relación con los contratos de concesión, la Corte ha encontrado que la extinción de los derechos derivados de la concesión procede exclusivamente por la vía judicial o por la vía administrativa. [www.cortecosntitucional.gov.vo/relatoria/2012/c-331-12.htm](http://www.cortecosntitucional.gov.vo/relatoria/2012/c-331-12.htm)

temporal dentro del área otorgada, la existencia de minerales en cantidad y calidad aprovechables, y autoriza apropiárselos mediante su extracción o captación y a gravar los predios de terceros con las servidumbres necesarias para el ejercicio eficiente de dichas actividades.

Este marco legal dispone un modelo de gestión en donde el Estado actúa como facilitador de la labor del operador minero que le corresponde al inversionista privado.

Algunos aspectos normativos básicos en la toma de decisiones por parte del inversionista minero, son:

- Contrato único de concesión minera.
- Igualdad de trato para las compañías extranjeras y nacionales.
- Primero en el tiempo, primero en el derecho.
- Área de concesión hasta 5.000 has en corrientes o cauces de aguas y hasta 10.000 has en otro tipo de terreno.

- Duración del contrato 30 años, prorrogable<sup>9</sup> hasta por 30 años.

---

<sup>9</sup> La Contraloría General de la República pidió la revocatoria del contrato de acuerdo de prórroga de Cerro Matoso, sino se atienden las recomendaciones y si no se hacen las modificaciones. De acuerdo con el ente de control en el acuerdo se introdujo modificaciones que van en contravía de los intereses del Estado, del principio de legalidad, de la seguridad jurídica y de la presunción de legalidad de los actos administrativos. Para el organismo este contrato no se encuentra ajustado a la Constitución Política y a los principios que rigen el derecho y la función administrativa. El Contrato de Concesión tiene una vigencia de 30 años. En este sentido, no se entiende la razón por la cual se extiende hasta el año 2029 y se establece que éste se prorroga por quince años más, es decir hasta agosto del 2044, condicionándolo al aumento de la producción en los siguientes diez años, a partir de la fecha de inscripción del mismo.

Adicionalmente se contempla una prórroga adicional de 20 años y una tercera sin que se establezca el término de esta última, desconociendo la normativa minera que regula este aspecto.

El contrato 051-96M es diferente de los contratos 866 de 1963 y 1727 de 1971, previamente suscritos con la empresa Cerro Matoso S.A., razón por la cual no puede. El proyecto minero cobijado por el Contrato 051-96M no cuenta con licencia ambiental. Las áreas de los contratos 866 y 1727, se incorporaron al área de contrato 051-96M el 1 de octubre de 2012, de manera tal que actualmente no cuentan con ninguna autorización ambiental que ampare las actividades de explotación que allí se realizan, conforme se dispone en el artículo 208 del Código de Minas, norma a la que se acogió Cerro Matoso para estos dos contratos en 2005.

La CGR no tiene claro el beneficio obtenido en la negociación frente a las regalías y compensaciones establecidas.

En primer lugar, la contraprestación económica a título de compensación adicional que fue pactada a cambio de un pago por canon de arrendamiento implica que los dineros que se reciban por este concepto van a parar en un porcentaje cercano al 50% a la Corporación Autónoma del Valle del Sinú y el porcentaje restante entre los municipios productores y el Distrito de Cartagena. En síntesis, la Nación mediante un contrato transfiere la participación a la que tiene derecho por el arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles.

- Estabilidad en las condiciones pactadas en el contrato relacionadas con regalías y canon superficiario.
- Simultaneidad entre estudios y trabajos de exploración técnica y los de viabilidad ambiental de la explotación.
- Prospección minera de superficie no requiere autorización ambiental.
- Título minero negociable entre particulares.(cesión de derechos)<sup>10</sup>

No obstante, previo al otorgamiento del contrato de concesión, el interesado deberá cumplir con los requisitos exigidos por la autoridad minera. En primer lugar, el proponente presentará una solicitud en la que formule su interés en un área libre susceptible de contratar.

---

<http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/contralora-pide-revocar-acuerdo-de-prorroga-a-contrato-de-cerromatoso/20130509/nota/1895672>.

<sup>10</sup> DIAZ, Orozco María Claudia. Minería una excelente opción para invertir en Colombia. Revista Escenarios y estrategias Minería y Energía No. 10, Unidad de Planeación Minero Energética, Ministerio de Minas y Energía, página 24, Bogotá, 2006.

Entre los requisitos para presentar una propuesta de contrato de concesión se encuentran:

Adquirir el formulario de solicitud de Contrato de Concesión se consigna en la cuenta corriente que para el efecto tenga la autoridad minera o la entidad delegada por ésta, con el recibo original de la consignación se reclama el formulario de solicitud Contrato Concesión en la sede correspondiente.

El formulario de solicitud deberá contener: Nombre, identificación y domicilio del interesado, señalamiento del municipio, departamento y de la autoridad ambiental de ubicación del área o trayecto solicitado; descripción del área objeto del contrato, y de su extensión; indicación del mineral o minerales objeto del contrato; mención de los grupos étnicos (con asentamiento permanente) en el área o trayecto solicitados y, si fuere del caso, el hallarse total o parcialmente dentro de zona minera indígena, de comunidades negras o mixtas; (Art. 15 de la Ley 21 de 1991 y Arts. 26 a 31 de la Ley 70 de 1993).

- Autorizaciones o conceptos de otras autoridades, en el caso de que el área abarque, en todo o en parte, lugares o zonas restringidas para la exploración y explotación minera.

De acuerdo con el artículo 35 del Código de Minas, podrán efectuarse trabajos y obras de exploración y de explotación de minas en las siguientes zonas y lugares, con las restricciones que se expresan a continuación:

- a) Dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados, señalado por los acuerdos municipales adoptados de conformidad con las normas legales sobre régimen municipal<sup>11</sup>, salvo en las áreas en

---

<sup>11</sup>. Para el asunto que nos ocupa, esto quiere decir que en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada; la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección de medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba una grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias.” (Sentencia C-339 del 7 de mayo de 2002. M.P. Jaime Araújo Rentería).

Señaló además la Corte que “la restricción de la minería en el perímetro urbano de las ciudades y poblados se encuentra sujeta a las normas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes, agregando una exclusión de la explotación y exploración minera en aquellas áreas donde las normas territoriales lo prohíben expresamente.

las cuales estén prohibidas las actividades mineras de acuerdo con dichas normas;

- b) En las áreas ocupadas por construcciones rurales, incluyendo sus huertas, jardines y solares anexos, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de su dueño o poseedor y no haya peligro para la salud e integridad de sus moradores;
- c) En las zonas definidas como de especial interés arqueológico, histórico o cultural siempre y cuando se cuente con la autorización de la autoridad competente<sup>12</sup>;
- d) En las playas, zonas de bajamar y en los trayectos fluviales servidos por empresas públicas de

---

[www.cortecosntitucional.gov.vo/relatoria/2012/c-339-02.htm](http://www.cortecosntitucional.gov.vo/relatoria/2012/c-339-02.htm)

<sup>12</sup>La Sentencia C-339 ibídem declaró exequible el literal c) del artículo 35 de la ley 685 de 2001 siempre que se entienda que la expresión “autoridad competente” comprende, en sus respectivos ámbitos de competencia, además de la autoridad minera, a la autoridad ambiental y a las autoridades encargadas de cuidar el patrimonio arqueológico, histórico y cultural.

transporte y cuya utilización continua haya sido establecida por la autoridad competente, si esta autoridad, bajo ciertas condiciones técnicas y operativas, que ella misma señale, permite previamente que tales actividades se realicen en dichos trayectos;

- e) En las áreas ocupadas por una obra pública o adscritas a un servicio público siempre que, cuente con el permiso previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y gestión de la obra o servicio;
- f) En las zonas constituidas como zonas mineras indígenas siempre y cuando las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código; (Arts. 121 a 129y 136 del C.M.)<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup>. **Jurisprudencia.** (Corte Constitucional, sentencia C-391 de 2002). Considera la demandante de esta norma que al consagrar un procedimiento sumario en materia minera, se impide la consulta a las comunidades indígenas mediante procedimientos apropiados que se efectúen a través de sus instituciones representativas, de manera previa e informada, teniendo en cuenta una

- g) En las zonas constituidas como zonas mineras de comunidades negras siempre y cuando las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código; (Arts. 130 a 133, 135 y 136 del C.M. y Ley 70 de 1993, arts. 26 a 31)

---

duración adecuada para que puedan llevar a cabo sus procesos de decisión y participación efectiva.

Al respecto observó la Corte, en sentencia C-891 de 2002, al declarar la exequibilidad: “Al establecer un procedimiento gubernativo sumario, el legislador busca conferir cierto grado de celeridad, eficacia e informalidad a los trámites y requisitos exigidos para ejercer la actividad minera, sin que lo anterior implique per se una forma de violación a los derechos de los pueblos indígenas o de cualquier otro sujeto que se considere afectado con un eventual proceso de exploración y explotación minera.

Por el contrario, el que sea sumario se ajusta a los principios que rigen el ejercicio de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución, toda vez que impone a las autoridades competentes, especialmente a la minera, el deber de adecuar sus actuaciones a dichos principios, sin perjuicio de que se requiera consultar a los pueblos indígenas.

Además, se debe tener en cuenta que el mismo Código, en diversas disposiciones consagra mecanismos que permiten la intervención de los pueblos indígenas y demás sujetos que se consideren afectados con los contratos de concesión.

[www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normas1.jspx?n=14731](http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normas1.jspx?n=14731)

**h)** En las zonas constituidas como zonas mineras mixtas siempre y cuando las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código. (Art. 134 del C.M.).

Una vez consultadas las entidades a que se refiere este artículo, los funcionarios a quienes se formule la correspondiente solicitud deberán resolverla en el término improrrogable de treinta (30) días, so pena de incurrir en falta disciplinaria. Pasado este término la autoridad competente resolverá lo pertinente.

De igual forma, el Ministerio de Minas en su Revista del Proceso Minero Colombiano<sup>14</sup>, señala los términos de referencia y guías mineras que se aplicarán en los trabajos de exploración y el estimativo de la

inversión económica resultante de la aplicación de tales términos y guías; deberá adjuntar un plano de localización del área solicitada con las coordenadas planas de los vértices o los rumbos y distancias de los lados del polígono a partir de un punto arcifinio, que cumpla con los principios, criterios y reglas técnicas propias de la ingeniería, geología y la topografía aceptadas y divulgadas oficialmente. De la misma manera deberá contener las normas técnicas oficiales para la presentación de planos y mapas aplicados a la minería, las cuales se encuentran contenidas en el Decreto 3290 del 18 de noviembre de 2003, la manifestación expresa de su compromiso de realizar los trabajos de exploración técnica con estricta sujeción a las guías ambientales, de acuerdo con la Resolución 18 0859 del 20 agosto de 2002, o la que la modifique, proferida por el Ministerio de Minas y Energía.

---

<sup>14</sup>. Del Proceso Minero Colombiano, Ministerio de Minas y Energía, página 11-27.

### **2.1.1 Propuesta de Contrato de Concesión**

De acuerdo con el Código de Minas en el artículo 270, la propuesta de contrato se presentará por el interesado directamente o por medio de su apoderado ante la autoridad competente o delegada, ante el notario o alcalde de la residencia del proponente, o por envío a través de correo certificado.

También será admisible la presentación de la propuesta a través de medios electrónicos, cuando la autoridad minera disponga de los equipos y servicios requeridos para tal fin.

En el evento de que una primera propuesta concurriera con otra u otras posteriores sobre la misma zona, se tendrá como fecha de presentación la de su recibo por la autoridad competente o comisionada, o la fecha y hora en que la empresa de correo certificado expida el recibo de envío. (Artículo 270 C.M.).

Ahora bien, con la finalidad de dar implementación a la Ley 962 del 2005, al consagrar que la administración pública con el fin de articular y disminuir los tiempos y costos de realización de los trámites por parte de los usuarios incentivará el uso de medios tecnológicos, el gobierno nacional mediante el Decreto 2345 de 2008 implementó la Plataforma Tecnológica “Catastro Minero Colombiano” por parte de la Autoridad Minera del entonces Ingeominas, en consonancia con los avances tecnológicos y con la normatividad existente, que garantizara el acceso en igualdad de condiciones y transparencia a los interesados en solicitar el derecho a explorar y explotar minerales en Colombia, mediante la radicación de las propuestas de contratos de concesión de medios electrónicos.

Pero a raíz de las inconsistencias y vulnerabilidades presentadas en el sistema, el Ministerio de Minas y Energía se vio en la necesidad de suspender la recepción de solicitudes, debido a las dificultades de funcionamiento del sistema que

fue desarrollada para automatizar los procesos del servicio minero y para garantizar la igualdad de condiciones y transparencia a los interesados, así como ajustar el CMC a los requerimientos de la Ley 1382 de 2010 y que hasta el mes de febrero 2012 se procedió a prorrogar la suspensión de trámites, argumentando que el sistema aún registraba fallas y que esta hasta la fecha de este estudio se encuentra suspendido<sup>15</sup>, no obstante lo anterior, las solicitudes que se presentaron se encuentran en curso de ser resueltas por la Agencia Nacional de Minería.

Según el trámite, una vez presentada la propuesta de contrato de concesión, si el proponente cumple con los requisitos exigidos por el Código de Minas (artículo 271), se procederá a congelar definitivamente el área a favor del proponente y se continúa con el proceso respectivo.

Cuando la propuesta no cumpla con los requisitos previstos por el Código

de Minas y siempre que éstos sean subsanables, la autoridad minera reservará provisionalmente, respetando el orden de prelación de que trata el artículo 270 del Código de Minas y el artículo 15 de la Ley 962 de 2005, requerirá al proponente para que en el término de treinta (30) días corrija o subsane la propuesta presentada.

Sí transcurrido el tiempo, no se allegaren los requisitos exigidos, se rechazará la propuesta mediante resolución motivada, contra la cual procede el recurso de reposición, en firme el acto, se pasará al estudio de la siguiente propuesta que debe cumplir el mismo trámite.

Presentada la propuesta, el funcionario competente que en este caso, se encuentra asignado al Grupo de Contratación Minera de la ANM, diligenciará la lista de chequeo de los documentos presentados con la propuesta, abre carpeta para formar el expediente y efectúa evaluaciones técnicas y, jurídicas además de la evaluación económica.

---

<sup>15</sup>. PONCE MURIEL Álvaro. ¿Cuál locomotora minera? El desalentador panorama de la minería en Colombia. Debate, Bogotá 2012 página, 107,119.



### 2.1.2 Rechazo de la propuesta

Dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de recibo de la propuesta, la autoridad minera deberá rechazar, mediante resolución que es objeto de recurso de reposición, las propuestas de contrato de concesión cuando se verifique que:

- El área pedida en su totalidad se halle ubicada en el sistema de parques de que trata el artículo 34 del C.M. y las zonas que por acto administrativo de autoridad competente excluyan la actividad minera<sup>16</sup> en áreas de reserva forestal.

---

<sup>16</sup> **Resolución No. 18 02141 del 24 de febrero de 2012**, Por la cual se declaró y delimitó unas áreas estratégicas mineras, cuyas consideraciones jurídicas y técnicas se detallan a continuación: La Ley 1450 del 16 de junio de 2011, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014” establece en el artículo 108: **Reservas mineras estratégicas**. La autoridad minera determinará los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales podrá delimitar áreas especiales en áreas que se encuentren libres, sobre las cuales no se recibirán nuevas propuestas ni se suscribirán contratos de concesión minera.

Lo anterior con el fin de que estas áreas sean otorgadas en contrato de concesión especial a través de un proceso de selección objetiva, en el cual la autoridad minera establecerá en los términos de referencia, las contraprestaciones económicas mínimas distintas de las regalías, que los interesados deben

- El área se superponga totalmente a propuestas que cumplan con los requisitos legales previstos en la norma o a contratos anteriores vigentes.

- El área se superponga totalmente a contratos donde el concesionario haya hecho uso del derecho de adición al objeto de la concesión, siempre y cuando el mineral o minerales adicionados coincidan con los solicitados por los terceros proponentes.

- El proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de

---

ofrecer, se catalogaron como de interés estratégico para el país los siguientes 11 minerales: oro, platino, cobre, minerales de fosfatos, minerales de potasio, minerales de magnesio, carbón metalúrgico y térmico, uranio, hierro y coltán.

Con esta clasificación de minerales estratégicos, el Servicio Geológico Colombiano (antiguo INGEOMINAS), basándose en el conocimiento del subsuelo colombiano, identificó las áreas de mayor potencial de alojamiento de minerales estratégicos, con el fin de delimitar las Áreas Especiales de Reserva Estratégica, contempladas en la ley del Plan Nacional de Desarrollo.

El Estado colombiano se reservará estas Áreas Estratégicas para iniciar Rondas que permitan su adjudicación a través de procesos de selección objetiva, buscando mayor beneficio en términos de inversión y producción.  
<http://www.ingeominas.gov.co/Noticias/Comunicados/Comunicado-de-prensa-013-de-2012.aspx>

inhabilidad e incompatibilidad para contratar.

- Exista por parte del proponente incapacidad legal, de conformidad con lo establecido en la Ley Civil, Código de Minas y Ley 80 de 1993.
- Cuando las personas jurídicas no contemple dentro del objeto social, la exploración y explotación de minas.

Si el proponente cumple con los requisitos de la propuesta o atiende oportunamente los requerimientos de subsanar las deficiencias, el abogado elabora la minuta de contrato único de concesión y envía el expediente al competente para citar al proponente o proponentes para firma del Contrato de Concesión.

La duración del contrato será por treinta (30) años, que contará desde la fecha de inscripción del Registro Minero<sup>17</sup>.

### **2.1.3 Póliza Minero Ambiental**

Al celebrarse el contrato de concesión minera el interesado debe, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de celebración del mismo, constituir una póliza de garantía para amparar el cumplimiento de obligaciones mineras y ambientales, el pago de multas y la caducidad. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsiste la obligación para el contratista de reponer dicha garantía.

El valor asegurado se calcula con base en los siguientes criterios:

- a) Para la etapa de exploración, un 5% del valor anual de la cuantía de la inversión prevista en exploración para la respectiva anualidad;
- b) Para la etapa de construcción y montaje el 5% de la inversión anual por dicho concepto;
- c) Para la etapa de explotación equivaldrá a un 10% del resultado de multiplicar el volumen de producción anual estimado del mineral objeto de la concesión, por el precio en

---

<sup>17</sup>Este término incluye los períodos de exploración, construcción y montaje, con sus prórrogas y el de explotación.

boca de mina del referido mineral fijado anualmente por el gobierno.

El funcionario competente recibe y evalúa la póliza minero ambiental si la encuentra de conformidad con lo previsto en la norma y la aprueba, de lo contrario, mediante auto que se notifica por estado, concede término de diez (10) días para que a partir de la notificación, aporte la modificación requerida.

En el evento de no presentar la póliza al contrato, se requiere al interesado para que en el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación del requerimiento, de conformidad con lo previsto por el artículo 13 del C.C.A., allegue la póliza, so pena de entender desistido el trámite de perfeccionamiento del contrato, aprobada la póliza se envía el expediente al competente para su inscripción y posterior envío al Grupo de Fiscalización y Ordenamiento Minero<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Instituto Colombiano de Geología y Minería Ingeominas, Programa de Fiscalización Integral, febrero 9 de 2011.

#### **2.1.4 Etapas del Contrato de Concesión**

La primera etapa es la exploración, construcción y montaje en esta la Autoridad minera verifica que el titular minero cumpla las obligaciones impuestas en el contrato entre las que se encuentran:

- ✓ Obligaciones Técnicas:  
Seguridad e higiene minero, plan minero, infraestructura asociada a la operación, control de inventarios de producción, entre otros.
- ✓ Obligaciones Económicas:  
Pago de regalías, compensaciones, registros de producción y de exportación<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Sentencia N° 567/95 de Corte Constitucional, 30 de Noviembre de 1995

REGALIAS-Propiedad estatal/FONDO NACIONAL DE REGALIAS

El Estado es la entidad constitucional titular del derecho a las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables y beneficiaria del pago de las regalías derivadas de aquélla y que las regalías así obtenidas son parte del patrimonio del Estado como único propietario del subsuelo. El Constituyente dio plenos poderes al legislador para regular el régimen de las regalías, no como derechos adquiridos, ni como bienes o rentas de las mencionadas entidades del orden territorial, sino como derechos de participación económica en una actividad que se refiere a bienes de propiedad del Estado, al señalar que con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados por

- ✓ Obligaciones Jurídicos:  
Modificaciones contractuales,  
pólizas, autorizaciones,  
procedimientos sancionatorios,  
entre otros.
- ✓ Obligaciones Sociales:  
Desarrollo regional, mano de  
obra y seguridad social,  
responsabilidad social

empresarial, bienes y  
servicios, entre otros.

- ✓ Obligaciones Ambientales:  
Manejo ambiental adecuado  
de componentes agua, suelo,  
aire y bioarticulación con  
autoridad ambiental.

---

la ley a los departamentos y municipios se creará el Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley.

#### REGALIAS-Concepto

La regalía es, en términos comunes, un privilegio, prerrogativa, preeminencia o la facultad privativa del soberano y que en términos jurídicos, la regalía es una contraprestación económica que percibe el Estado y que está a cargo de las personas a quienes se otorga el derecho a explorar o explotar recursos naturales no renovables; esa contraprestación consiste en un porcentaje sobre el producto bruto explotado que el Estado exige como propietario de los recursos naturales no renovables, bien directamente o a través de las empresas industriales o comerciales del Estado, titulares de los aportes donde se encuentran las minas en producción.

#### PROPIEDAD DEL SUBSUELO

El subsuelo es del Estado, que no de la Nación, como en los tiempos de la Carta de 1886, por la explotación del subsuelo se generan regalías en favor del Estado. Además, las regalías tienen dos destinaciones: la Nación y las entidades territoriales: las de las entidades territoriales, a su vez, provienen de dos vías: directamente y a través del Fondo Nacional de Regalías; por ello, la autonomía que la Constitución le reconoce a las entidades territoriales se reduce, en el campo de las regalías, a participar en las rentas nacionales en los términos que fije la ley. corte constitucional.vlex.com.co/vid/-43559318

El control de estas obligaciones, es asignado a un grupo interdisciplinario entre los que se encuentran: personal asignado para cada Grupo de Operación para una fiscalización integral (geólogo, ingeniero de minas abogado, especialista en contra prestaciones, económicas, ingeniero ambiental, especialista en análisis socio económico, apoyo administrativo).

### 2.1.5 Terminación del contrato de Concesión

Dentro de las formas de terminación del contrato, está la renuncia del concesionario quien podrá hacerlo libremente y retirar todos los bienes e instalaciones que hubiere construido o instalado, para la ejecución del

contrato y el ejercicio de las servidumbres.

Para la viabilidad de la renuncia, será requisito estar a paz y salvo, con las obligaciones exigibles al tiempo de solicitarla. La autoridad minera dispondrá de un término de treinta (30) días para pronunciarse sobre la renuncia planteada por el concesionario, término que al vencerse dará lugar al silencio administrativo positivo. De la renuncia se dará aviso a la autoridad ambiental.

De igual forma la terminación del contrato se podrá hacer por mutuo acuerdo de las partes, caso en el cual se acordará todo lo relativo al retiro o abandono de los bienes o instalaciones del concesionario y la readecuación y sustitución ambiental del área, de este evento se dará aviso a la autoridad ambiental.

Igualmente se puede dar una terminación del contrato por vencimiento del plazo, incluyendo su

prórroga<sup>20</sup> o por cualquier otra causa, el concesionario deberá dejar en condiciones para el uso normal de los frentes de trabajo utilizables, las obras destinadas al ejercicio de las servidumbres y las de conservación, mitigación ya adecuación ambiental.

Otra forma de terminación del contrato de concesión es por la muerte del concesionario, sin embargo esta causal sólo se hará efectiva si dentro de los dos (2) años

---

<sup>20</sup> Decreto número 0943 del 14 de mayo de 2013 “ Por el cual se reglamentan los artículos 74,75,76 y 77 de la Ley 685 de 2001 y el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 que en su:

Artículo 3. **PRORROGA DEL CONTRATO DE CONCESION.** Para la prórroga del contrato de concesión a fin de continuar con la actividad de explotación, el concesionario deberá presentar un nuevo programa de trabajo y Obras para la vigencia dela prórroga, y estar al día de todas las obligaciones derivadas del contrato de concesión y la Ley.

Indica además, en su artículo 4 los criterios técnicos para la prórroga del contrato de concesión entre los que se encuentran aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales y jurídicos, se advierte igualmente que si los criterios señalados han sido cumplidos la autoridad minera puede consentir en la modificación el contrato en cuanto al termino de su vigencia, y en caso contrario deberá la autoridad minera de abstenerse de suscribir el acta de prórroga y motivar su decisión mediante acto administrativo.

[www.alcaldiadebogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53071](http://www.alcaldiadebogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53071)

siguientes al fallecimiento, los asignatarios no piden ser subrogados en los derechos emanados de la concesión, presentando la prueba correspondiente y pagado las regalías establecidas por la Ley.

En este caso, si posteriormente llegaren a ser privados de todo o parte de la mencionada concesión del Estado no será responsable de ningún pago, reembolso o perjuicio a favor de ellos o de quienes hubieren probado un mejor derecho a suceder al primitivo concesionario.

Durante el lapso de dos (2) años mencionado anteriormente, si los interesados no cumplieren con la obligación de pagar las regalías se decretará la caducidad de la concesión.

#### **2.1.6 Causales de Caducidad del Contrato de Concesión Minera**

Otra de las formas de terminación del Contrato de Concesión Minera es por el fenómeno de la declaración de su

caducidad<sup>21</sup>, exclusivamente por las siguientes causas:

---

#### **<sup>21</sup> Jurisprudencia Constitucional Sentencia C-983/10 DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN DECLARACION DE CADUCIDAD DE CONTRATO-**

En relación con el debido proceso aplicado a la declaratoria de caducidad de contratos por parte de la administración, esta Corporación ha establecido que esta figura, constituye una medida constitucionalmente legítima, que resulta válida para afrontar eventuales situaciones de incumplimiento contractual, o para prevenir otros comportamientos que puedan tener efecto directo sobre el interés público. A este respecto ha establecido la jurisprudencia de la Corte que: (i) la caducidad es una figura plenamente legítima desde el punto de vista constitucional; (ii) se origina en el incumplimiento grave del contratista; (iii) se fundamenta en dicho incumplimiento y por tanto no tiene el carácter de sanción; (iv) tiene como consecuencia que la administración dé por terminado el contrato y ordene su liquidación; (v) debe ser declarada mediante un acto debidamente motivado, (vi) debe respetar el debido proceso; (v) implica igualmente que la administración queda facultada para adoptar las medidas necesarias para ejecutar el objeto contratado; (vii) trae aparejadas importantes consecuencias como multas o sanciones que se hubieren estipulado, así como la inhabilidad que por ministerio de la Ley existe para volver a celebrar contratos con las entidades estatales durante el tiempo que fije la ley; (viii) es una medida de control efectivo frente al grave incumplimiento del contratista, (ix) es una medida que protege el interés público; (x) no tiene como finalidad sancionatoria, en principio, sino de prevención; (xi) constituye una de las estipulaciones contractuales de las partes; (xii) se utiliza para prevenir otras situaciones ajenas al cumplimiento del contrato, que el Legislador ha considerado que afectan gravemente el interés público, en cuyo caso es prevalente el carácter sancionatorio de la medida; (xiii) tiene un efecto disuasivo y ejemplarizante; (xiv) se encuentra amparada por la presunción de legalidad, no obstante lo cual puede ser controvertida tanto en la vía gubernativa como por la vía jurisdiccional; (xv) no implica vulneración de los derechos del contratista, ya que la(s) persona(s) o entidad(es) afectada(s) por esta medida conocen previamente las consecuencias del incumplimiento y tienen el deber jurídico de soportar las restricciones o efectos desfavorables, siempre y cuando la medida se adopte con respeto del debido proceso.

- a) La disolución de la persona jurídica, menos en los casos en que se produzca por fusión, por absorción;
- b) La incapacidad financiera que le impida cumplir con las obligaciones contractuales y que se presume si al concesionario se le ha abierto trámite de liquidación obligatoria de acuerdo con la ley;
- c) La no realización de los trabajos y obras dentro de los términos establecidos en este Código o su suspensión no autorizada por más de seis (6) meses continuos;
- d) El no pago oportuno y completo de las contraprestaciones económicas;
- e) El omitir el aviso previo a la autoridad para hacer la cesión del contrato;
- f) El no pago de las multas impuestas o la no reposición de la garantía que las respalda;
- g) El incumplimiento grave y reiterado de las regulaciones de orden técnico sobre la exploración y explotación mineras, de higiene, seguridad y laborales, o la revocación de las autorizaciones ambientales necesarias para sus trabajos y obras;
- h) La violación de las normas sobre zonas excluidas y restringidas para la minería<sup>22</sup>;

---

<sup>22</sup> Decreto 0934 del 9 de mayo de 2013” Por el cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001”.

**Artículo 1.** Que la decisión de establecer zonas excluibles y restringidas de minería competente exclusivamente, y dentro de los límites fijados en los artículos 34 y 34 de la Ley 685 de 2001, a las autoridades minero y ambiental, quienes actuaran con base en estudios técnicos, económicos y sociales y ambientales dando aplicación al principio del desarrollo sostenible.

**Parágrafo.** Para efectos de la aplicación del artículo 37 de la Ley 685 de 2001 y de este decreto, se entenderá que la autoridad ambiental es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporaciones

- i) El incumplimiento grave y reiterado de cualquiera otra de las obligaciones derivadas del contrato de concesión;
- j) Cuando se declare como procedencia de los minerales explotados un lugar diferente al de su extracción, provocando que las contraprestaciones económicas se destinen a un municipio diferente al de su origen. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que procedan en contra del concesionario y de los funcionarios públicos que con su conducta promuevan estos actos.
- k) Cuando empresas o personas naturales en ejercicio de actividades mineras, contraten a personas menores de 18 años para desempeñarse en

labores de minería tanto de cielo abierto como subterráneas<sup>23</sup>.

En el caso contemplado en el presente artículo, el concesionario queda obligado a cumplir o garantizar todas las obligaciones de orden ambiental que le sean exigibles y las de conservación y manejo adecuado de los frentes de trabajo y de las servidumbres que se hubieren establecido.

### **2.1.7 Reversión Gratuita**

En todos los casos de terminación del contrato, ocurrida en cualquier tiempo, operará la reversión gratuita de bienes en favor del Estado circunscrita esta medida a los inmuebles e instalaciones fijas y permanentes, construidas y destinadas por el concesionario en forma exclusiva al transporte y al embarque de los minerales provenientes del área comprendida en tal contrato y de aquellas que se

---

Autónomas Regionales la de Desarrollo Sostenible y los Distritos Especiales de acuerdo a lo establecido en la Ley 768 de 2002 o quien haga sus veces y la autoridad minera o concedente, la Agencia Nacional de Minería o quien haga sus veces.

---

<sup>23</sup>Literales adicionados por el artículo 9 de la Ley 1382 de 2010. Ley INEXEQUIBLE, Sentencia C-366-11 del 13 de mayo de 2011; efectos diferidos por el término de dos (2) años.  
[www.alcaldiadebogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?1=53052](http://www.alcaldiadebogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?1=53052)



encuentren incorporadas a los yacimientos y accesos y que no puedan retirarse sin detrimento del mismo (yacimiento) y de los frentes de trabajo. Esta reversión operará sólo en los casos en que las características y dimensiones de los mencionados bienes, a juicio de la autoridad minera, los hagan aptos como infraestructura destinada a un servicio público de transporte o embarque o darse al uso de la comunidad.

#### **2.1.8 Obligaciones en caso de terminación**

El concesionario, en todos los casos de terminación del contrato, quedará obligado a cumplir o a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de hacerse efectiva dicha terminación. De igual manera, dará cumplimiento o garantizará sus obligaciones de orden laboral reconocidas o causadas al momento de su retiro como concesionario.

### **3.1 CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA EN CHILE**

Según(Ossa,1991)<sup>24</sup>, en Chile como en Colombia el Estado es propietario de todas las sustancias minerales encontradas a excepción de los minerales utilizados para la construcción que es de propiedad del dueño del terrero y las salinas formadas por las riberas marinas.

La Constitución Política del Estado de Chile promulgada en 1980, contiene las normas fundamentales y las bases generales aplicables a la minería chilena, las que, con algunas variantes, son las mismas aprobadas en 1971 y mantenidas en vigencia por el Acta Constitucional N° 3, de 1976. Las encontramos en el artículo 19 N° 24 de la Constitución y en las disposiciones segunda y tercera transitorias del mismo cuerpo legal.

La misma Constitución dispuso que una ley orgánica constitucional estableciera y regulara diversos

---

<sup>24</sup> OSSA, Bulnes, Juan Luis. Derecho de Minero. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, páginas,12, 27.

aspectos contenidos en ella, lo que se cumplió con la dictación de la Ley N° 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, de 21 de enero de 1982, que entró en vigencia juntamente con el Código de Minería, conforme fue modificado y dispuesto por la Ley N° 18.246, de 24 de septiembre de 1983.

Por Ley N° 18.248, de 14 de octubre de 1983, se dictó el actual Código de Minería.

Posteriormente, por Decreto N° 1 del Ministerio de Minería, publicado en el Diario Oficial de 27 de febrero de 1987, se dictó el Reglamento del Código de Minería, que entró de inmediato en vigor, derogando el anterior, con excepción de algunas de sus disposiciones.

Finalmente, las Leyes N° 18.681, de 31 de diciembre de 1987, y N° 18.941, de 22 de febrero de 1990, modificaron el Código de Minería y el Decreto Supremo N° 4 de Minería, publicado en el Diario Oficial el 2 de

mayo de 1989, que modificó el Reglamento de dicho Código.

De manera, pues, que la legislación minera actualmente vigente está constituida por las normas relativas a esta materia contenidas en la Constitución Política de 1980, la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, el Código de Minería de 1983 y el Reglamento del Código de Minería de 1987.

Para nuestro estudio, es importante analizar el procedimiento de constitución de la concesión minera en Chile establecido en la Ley 18.248 del 14 de octubre de 1983, en el cual el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas.

Pero toda persona tiene la facultad de catar y cavar para buscar sustancias minerales, con arreglo al párrafo 2° de este título, y también el derecho de constituir concesión minera de exploración o de explotación sobre las sustancias que la ley orgánica constitucional declara concesibles, con la sola excepción de las personas señaladas en el artículo 22.

Según (Gómez, 1999)<sup>25</sup> en Chile, la concesión minera es un derecho real e inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño; oponible al Estado y a cualquier persona; transferible y transmisible; susceptible de hipoteca y otros derechos reales y, en general, de todo acto o contrato; y que se rige por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, salvo en lo que contraríen disposiciones de la ley orgánica constitucional o del presente Código.

La concesión minera puede ser de exploración o de explotación; esta

última se denomina también pertenencia.

Chile es uno de los países que le brinda mayor seguridad jurídica a los proponentes, en la medida que la persona interesada en constituir un contrato de concesión, presenta un escrito que para la concesión de exploración se denomina pedimento y, para la de explotación, manifestación, no es necesario designar abogado, ni conferir mandato judicial.

Para intervenir en la gestión de constitución de las concesiones la competencia radica en el juez de letras en lo civil que tenga jurisdicción sobre el lugar en que esté ubicado el punto medio señalado en el pedimento, o el punto de interés indicado en la manifestación.

Vale la pena aclarar que el error en que se incurra al presentar pedimento o manifestación ante un juez que sea incompetente en razón del territorio, no afectará su validez, siempre que en el punto medio indicado en el pedimento o en el punto de interés señalado en la manifestación, los

---

<sup>25</sup> GÓMEZ, Sergio. Manual de Derecho Minero. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Páginas 10,23.

respectivos territorios jurisdiccionales no estén clara y debidamente deslindados por líneas naturales u ostensibles.

En este trámite cualquiera podrá pedir o manifestar a nombre de otro aunque no sea su mandatario y sin que deba sujetarse a las disposiciones del inciso tercero del artículo 6° del Código de Procedimiento Civil; sin perjuicio de que el interesado deberá ratificar ante el secretario lo obrado por el agente, dentro del plazo de treinta días, contado desde la presentación del pedimento o la manifestación.

No afectará la validez de un pedimento o de una manifestación la circunstancia de comprender terrenos ya manifestados o ya pedidos, sin perjuicio de los derechos preferentes a que haya lugar.

En este proceso minero, también se tiene en cuenta el derecho de prelación o preferencia para constituir la pertenencia de quien primero presente la manifestación.

Vale la pena aclarar que el error en que se incurra al presentar pedimento o manifestación ante un juez que sea incompetente en razón del territorio, no afectará su validez, siempre que en el punto medio indicado en el pedimento o en el punto de interés señalado en la manifestación, los respectivos territorios jurisdiccionales no estén clara y debidamente deslindados por líneas naturales u ostensibles.

Tampoco afectará la validez de un pedimento o de una manifestación, la circunstancia de comprender terrenos ya manifestados o ya pedidos, sin perjuicio de los derechos preferentes a que haya lugar.

Según la Sociedad Nacional de Minería de Chile<sup>26</sup>, el proceso de sentencia constitutiva de concesión se tramita ante el juez de letras de lo civil, a fin de verificar si la presentación es correcta, para lo cual se dispondrá el envío del expediente al SERNAGEOMIN, para el informe

---

26

[http://www.sonami.cl/imagenes/stories/pdf/Tramites\\_necesarios-para\\_instalar\\_faenas%20minera.pdf](http://www.sonami.cl/imagenes/stories/pdf/Tramites_necesarios-para_instalar_faenas%20minera.pdf)

técnico y en caso de tener errores u omisiones se tiene un plazo de ocho días para su corrección.

Seguidamente el Servicio Nacional de Geología y Minería SERNAGEOMIN, evaluará los antecedentes presentados por el peticionario, para lo cual cuenta con un plazo de sesenta días contados desde la recepción del expediente.

Si la respuesta del SERNAGEOMIN es favorable el juez dictará sentencia, declarando constituida la concesión de exploración, si en caso contrario contiene observaciones, el juez informará, al solicitante para que en un plazo de treinta días, corrija las observaciones.

Una vez aprobado, el secretario entregará extracto de la sentencia constitutiva de la concesión, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de Minería, para la inscripción dentro de los ciento veinte días contados desde la fecha de sentencia ante el conservador de minas.

Se infiere de lo anterior, que los jueces de letras de lo civil en Chile, que intervienen en el trámite no son del todo autónomos, ya que el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), es el asesor técnico de los jueces, en el cual estos se apoyan para dictar las sentencias constitutiva de concesión minera.

Así las cosas, en conclusión para tener un contexto más claro de la posibilidad de implementar aspectos de la legislación minera chilena en Colombia, el analista Carlos duarte en su artículo denominado: “La Legislación Minera en Chile y Colombia: un ejercicio de comparación crítico” <sup>27</sup>, enuncia aspectos críticos, por los cuales la experiencia chilena no es la

---

<sup>27</sup> [http://gobernabilidad-minera.wordpress.com/2012/01/10/la legislación-minera.en chile un- ejercicio- de- comparación critico/](http://gobernabilidad-minera.wordpress.com/2012/01/10/la-legislacion-minera-en-chile-un-ejercicio-de-comparacion-critico/)  
[1] Comisión Chilena del Cobre <http://www.cochilco.cl>

[2] Carlos Mancilla vicepresidente de la CUT – Chile en la Región de los Ríos. En <http://www.biobiochile.cl/2010/08/12>

[3] En Diario Correo del Orinoco, 16 de Octubre 2010

panacea, ya que este modelo presenta falencias, que de acuerdo con un estudio de Fedesarrollo le han restado competitividad al modelo chileno.

*“Bastante se habla en Colombia de emular el modelo de minería chileno, a continuación se echará un vistazo a este caso ya que resulta particularmente ilustrativo a la hora de comparar las legislaciones mineras latinoamericanas y, más allá, los efectos del modelo de gobernabilidad minera de enclave exportador. En este sentido, es importante comenzar describiendo cuales son las modificaciones jurídicas que, de acuerdo con Fedesarrollo, le han restado competitividad al modelo chileno. Dichas transformaciones operaron en los siguientes ámbitos: i) la necesidad de evaluar y limitar los impactos ambientales de gran magnitud sobre las explotaciones a cielo abierto; ii) el debate por las condiciones precarias de seguridad de los trabajadores mineros en las grandes empresas mineras, a raíz del accidente de los 33 mineros en la Mina de San José en Agosto del 2010; y iii) la discusión sobre la propiedad del subsuelo y la posibilidad de modificar las regalías o*

*“royalty” a la explotación minera en favor de la nación”.*

*[...] Los dos primeros ítems indudablemente contienen correspondencias con los actuales debates en la gobernabilidad minera colombiana:*

*Los controles medioambientales sobre la explotación: la necesidad chilena por evaluar y de cierta manera limitar los impactos sobre el medio ambiente por parte de explotaciones a cielo abierto, guardan relación con los grandes proyectos que en este sentido ya viene siendo implementados en Colombia (como las explotaciones carboníferas y petroleras), o aquellos que en los últimos tiempos han buscado implementarse bajo la legislación contemporánea (el proyecto de Santurban o el de Armenia). También es notable, en este sentido, la insistencia por parte de las empresas internacionales mineras para flexibilizar los controles estatales sobre los impactos medioambientales de las explotaciones mineras legales a gran escala. Prioridad, que como vimos en el ejercicio genealógico, es evidente a partir del intento de reforma al código de 1988 en 1996, así como en las primeras versiones de la ley 685, pero sobre todo en la reforma del 2010. En este sentido el debate*

*chileno en torno a los impactos irreversibles sobre la naturaleza a partir de la explotación a gran escala, más que un modelo a seguir nos debe llamar a la justa reflexión y ponderación, frente a los otros recursos no renovables como el agua, la riqueza en biodiversidad, y los ya frágiles equilibrios ecológicos en la gran parte de las zonas en miras de explotación [...].*

## CONCLUSIONES

1. En el estudio realizado se observa que en los contratos de concesión minera en Colombia, hay imprevisión en el trámite de las solicitudes de nuevas propuestas, en virtud a que la plataforma tecnológica no ofrece verdaderas garantías de igualdad y transparencia, tan es así que el Ministro de Minas, en entrevista con El Espectador del día 22 de abril de 2013 explicó, que en mayo terminará la depuración de la 'piñata de títulos mineros', lo que dará lugar a que los interesados en obtener un lugar para hacer exploración minera puedan tramitar su solicitud.
2. De igual forma, se observa tardanza en la Autoridad Minera, en razón a que existían solicitudes desde el año 2006 sin tramitar y se debió frenar las nuevas solicitudes en virtud a que faltaban cerca seis mil solicitudes para hacerles que se encontraban represadas.
3. Se observa que en Colombia no hay una política minera clara que de seguridad a los proponentes mineros, de que su solicitud va a ser atendida sin demoras y que le garantice al Estado que ese proponente en efecto cumpla con todas las obligaciones adquiridas en el contrato de concesión y no solo se dedique a saquear la riqueza del país y acabar con el medio ambiente.
4. Del estudio comparativo se observa que la legislación minera chilena, no es la panacea, en virtud a que presenta falencias en cuanto a seguridad en el trabajo en las minas, faltan garantías en la protección al ambiente y el amejoramiento de regalías, aunado al hecho que el papel que realiza el juez no es autónomo, ya que el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) es un



Asesor técnico de los jueces, en el cual se apoyan, para dictar las sentencias constitutivas de la concesiones mineras y por lo tanto se debe acudir a este organismo para verificar los requisitos.

## BIBLIOGRAFIA

1. **Aramburu José Luis.** Curso de Derecho Minero. primera edición, 1984 página 57.
2. **Bahamon C, Álvaro.** Derecho de Minas y Petróleos. Editorial Legis. 1988 página 346
3. **Benavides José Luis.** El contrato Estatal. Universidad Externado de Colombia, 2004, página 338.
4. **Boussingault, Jean Batiste y Roukin François Desire.** Viajes Científicos a los Andes Ecuatoriales edición facsimilar de la impresión de Paris, 1849, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Santafé de Bogotá.
5. **Cuello, Duarte Francisco.** Contratos de la Administración Pública Ecoe Ediciones. Tercera Edición Bogotá, 2009 página 65.
6. **Díaz Orozco María Claudia.** Minería una excelente opción para invertir en Colombia. Revista Escenarios y Estrategias Minería y Energía No. 10, Unidad de Planeación Minero Energética, Ministerio de Minas y Energía, pagina 24, Bogotá, 2006.
7. **Fandiño Gallo Jorge Eliecer.** Régimen Jurídico del Contrato Estatal, pagina 53. 2009.
8. **Franco Gutiérrez Omar.** La Contratación Administrativa. Segunda Edición, Medellín, 1994, página 52,53.
9. **Garcia-Tervijano Garnica, Ernesto.** La Cesión del Contrato Administrativo-La Subcontratación, primera edición, Editorial Civitas, MADRID, 1947. Páginas 20 y21.
10. **Gómez Núñez Sergio.** Manual de Derecho Minero, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1999.
11. **Herrera Benjamín.** Contratos Públicos. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, pagina 126, 2005
12. **Lamprea Rodríguez Pedro A.** Contratación Estatal. Editorial Temis, Bogotá, 2007 pagina 67.
13. **Londoño Ortiz Joaquín.** Estado de la Legislación Minera, página 210
14. **Matallana Camacho Ernesto.** Manual de Contratación de la Administración pública, reforma a la Ley 80 de 1993, Universidad Externado de Colombia, tercera edición, 2012 página 977.
15. **Melo Jorge Orlando.** Colombia Hoy perspectivas hacia el Siglo XXI.TM Editores. Bogotá 1995. P{agina 29
16. **Mosquera Mesa Ricardo.** El Petróleo en Colombia posibilidades e incertidumbres. Revista Económica Colombiana, órgano de la Contraloría General de la Republica página 41.
17. **Ossa Bulmes Juan Luis.** Derecho de Minería, Editorial Jurídica de Chile.

18. **Pachón Lucas, Carlos.** Estatuto General de la Contratación. Librería Ediciones El Profesional. Cuarta Edición, Bogotá, 2009.
19. **Palacio, Hincapié Juan Ángel.** La Contratación de las Entidades Estatales. Librería Jurídica Sánchez R Ltda Sexta Edición, Medellín 2010.
20. **Ponce, Muriel Álvaro.** ¿Cuál locomotora? El desalentador panorama de la minería en Colombia, Debate, Bogotá, 2012.
21. **Rodríguez Tamayo Mauricio Fernando.** Librería Jurídica Sánchez R Ltda. Medellín 2013 pagina 457.
22. **Salguero Basto, Gonzalo.** Contratos Administrativos. Ediciones Librería del Profesional Tercera Edición, 1983, página 157.
23. **Solano Sierra Jairo Enrique.** Contratación Administrativa, Librería del profesional, Bogotá, 1994 pagina 159 al 163.
24. **Tremolada Álvarez Eric.** El Acuerdo Comercial con la Unión Europea. Memorias Cuarta Jornada Cátedra Jean Monnet en Colombia. Colección Pretextos. Universidad Externado de Colombia. 2010, página 14.
25. **Velásquez J Douglas.** Derecho de Minas y Energía y Petróleos. Universidad Santo Tomas, página 201, 1984.
26. **Vergara, Blanco Alejandro.** Principios y Sistemas del Derecho Minero. Estudio Histórico- Dogmático. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile. 1996.

## Fuentes de Internet

1. Discurso de posesión del presidente Juan Manuel Santos Calderón, [wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/agosto/2010080715.aspx](http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/agosto/2010080715.aspx), hora de consulta 12.03 pm.
2. <http://www.semana.com/inacion/articulo/contrato-cerro-matoso-ira-hasta-2029-minminas/265414-3>. Recuperado el 3 de junio de 2013 hora de consulta 11:30 a:m.
3. <http://www.ingeminas.gov.co/Noticias/Comunicados/Comunicado-de-prensa-013-de-2012.aspx>. Resolución No. 18 02141 del 24 de febrero de 2012.
4. <http://www.semana.com/nacion/articulo/contrato-cerro-matoso-ira-hasta-2029-minminas/265414-3>
5. <http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/contralora-pide-revocar-acuerdo-de-prorroga-a-contrato-cerromatoso/20130509/nota/1895672>.
6. [www.avancejuridico.com/ctualidad/documentosoficiales/2013/48828/r](http://www.avancejuridico.com/ctualidad/documentosoficiales/2013/48828/r).

7. [www.corteconstitucional.gov.vo/relatoria/2012/c-331-12.htm](http://www.corteconstitucional.gov.vo/relatoria/2012/c-331-12.htm)
8. [www.cortecosntitucional.gov.vo/relatoria/2012/c-339-02.htm](http://www.cortecosntitucional.gov.vo/relatoria/2012/c-339-02.htm)
9. [www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normas1.jsp?!=14731](http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normas1.jsp?!=14731)
10. <http://www.ingeminas.gov.co/Noticias/Comunicados/Comunicado-de-prensa-013-de-2012.aspx>
11. corte constitucional.vlex.com.co/vid/-43559318
12. [www.alcaldiadebogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53071](http://www.alcaldiadebogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53071)
13. [www.cortecosntitucional.gov.co/relatoria/2010/c-983-10.htm](http://www.cortecosntitucional.gov.co/relatoria/2010/c-983-10.htm).
14. [www.alcaldiadebogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?1=53052](http://www.alcaldiadebogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?1=53052)
- 15.<sup>1</sup> <http://gobernabilidad-minera.word> press.com/2012/01/10/la legislación-minera.en chile un- ejercicio- de- comparación critico/
16. [1] Comisión Chilena del Cobre <http://www.cochilco.cl>
17. [2] Carlos Mancilla vicepresidente de la CUT – Chile en la Región de los Ríos. En <http://www.biobiochile.cl/2010/08/12>
18. [3] En Diario Correo del Orinoco, 16 de Octubre 2010